Mandatos del Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias; de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; y de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.

REFERENCE: UA G/SO 217/1 G/SO 214 (107-9) G/SO 214 (3-3-16)
MEX 4/2014

17 de abril de 2014

Excelencia:

Tenemos el honor de dirigirnos a Usted en nuestra calidad de Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias; Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; y Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, de conformidad con la decisión 25/116 y las resoluciones 25/18 y 17/2 del Consejo de Derechos Humanos.

En este contexto, quisiéramos señalar a la atención urgente del gobierno de su Excelencia información que hemos recibido en relación con los supuestos **arresto arbitrario y desaparición forzada del Sr. Marco Antonio Valle Cabañas** en la ciudad de Atoyac de Álvarez, Guerrero, México.

El Sr. Cabañas es un abogado que presentó varios casos contra las fuerzas armadas (en particular la Secretaría de la Defensa Nacional – SEDENA) por desapariciones forzadas. Varios miembros de su familia han desaparecido durante los últimos años.

Según las informaciones recibidas:

El 22 de marzo de 2014 alrededor de las doce del día, dos hombres vestido de civiles habrían ingresado al domicilio particular del Sr. Cabañas, en donde se encontraba con su esposa, en la ciudad de Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero, con pistola en mano. Los hombres habrían supuestamente manifestado que pertenecían al gobierno y habrían dicho que iban a llevar al Sr. Cabañas con ellos, sin decir a donde o por qué razón.

La esposa del Sr. Cabañas habría salido de la cocina, en donde se encontraba, y habría preguntado asustada que pasaba. Uno de los hombres de inmediato le habría apuntado con una pistola en la frente. Se alega que al mismo tiempo los dos hombres habrían procedido a sacar el Sr. Cabañas del interior de su domicilio, uno de ellos expresando que llevaban al Sr. Cabañas con ellos porque existía una supuesta denuncia anónima en su contra y habían recibido

órdenes de llevárselo. Se alega que no habrían presentado una orden de arresto u otro tipo de documento oficial.

Según la fuente, los dos hombres pertenecerían a la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada (SEIDO).

Se alega que la familia del Sr. Cabañas habría presentado varias quejas ante autoridades estatales y federales (Procuraduría General de la República, Procuraduría General de la Justicia del Estado de México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comisión Estatal de Derechos Humanos), pero que, hasta la fecha, estas diferentes instituciones le habrían negado información alguna que dé con el destino y paradero del Sr. Cabañas. Se alega que la familia también habría pedido información sobre el paradero del Sr. Cabañas a la presencia militar de su región (zonas militares 13 y 27), la cual habría negado toda participación.

Se alega además que el 14 de abril de 2014, unos soldados en las zonas militares antemencionadas habrían comunicado informalmente a miembros de la familia del Sr. Cabañas que habrían visto al Sr. Cabañas vivo, pero con señales de que habría sido fuertemente golpeado, resultando en unas costillas rotas y una herida abierta, supuestamente causada por un golpe con arma blanca.

Se informa que, desde el 22 de marzo de 2014, la familia del Sr. Cabañas no tiene informaciones confirmadas sobre su destino y paradero.

Sin pretender pronunciarnos con antelación sobre los hechos alegados, deseamos expresar nuestra seria preocupación por la integridad física y psicológica del Sr. Cabañas. Asimismo, nos permitimos hacer un llamamiento al Gobierno de su Excelencia para que aclare urgentemente el destino y paradero del Sr. Cabañas y que adopte todas las medidas necesarias para asegurar la protección de sus derechos fundamentales.

En relación a las alegaciones según las cuales el destino y paradero del Sr. Cabañas son desconocidos, quisiéramos recordar al Gobierno de Su Excelencia la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la cual establece disposiciones para garantizar la protección de las personas, incluyendo:

- artículo 2 (ningún Estado cometerá, autorizará ni tolerará las desapariciones forzadas);

- artículo 3 (obligación de tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales y otras medidas eficaces para prevenir o erradicar los actos de desapariciones forzadas);

- artículo 10 (toda persona privada de libertad deberá ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos y, con arreglo a la legislación nacional, presentada sin demora ante una autoridad judicial luego de la aprehensión); y

- artículo 12 (obligación de establecer normas que permitan designar a los agentes del Gobierno habilitados para ordenar privaciones de libertad, fijen las condiciones en las cuales tales órdenes pueden ser dadas, y prevean las penas de que se harán pasibles los agentes del gobierno que se nieguen sin fundamento legal a proporcionar información sobre una privación de libertad).

En este contexto, deseamos también llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre las normas fundamentales enunciadas en la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos y en particular los artículos 1 y 2. Éstos establecen, respectivamente, que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional y que es la responsabilidad primordial y el deber de todos los Estados de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica todos esos derechos y libertades.

Además, quisiéramos referirnos a los artículos siguientes:

- el artículo 9, párrafo 3, apartado c), establece que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, entre otras cosas, a ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales; y

- el artículo 12, párrafos 2 y 3, de la declaración estipula que el Estado garantizará la protección, por las autoridades competentes, de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración. A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Finalmente, nos gustaría llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, y en particular sobre los principios siguientes:

- el principio 16 que estipula: “Los gobiernos garantizarán que los abogados (a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; [...] y (c) no sufran ni estén expuestos

a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.”;

- el principio 17 que estipula: “Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.”; y

- el principio 18 que estipula: “Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones.”

Teniendo en cuenta la urgencia del caso, agradeceríamos recibir del Gobierno de su Excelencia una respuesta sobre las acciones emprendidas para proteger los derechos del Sr. Cabañas de conformidad con los instrumentos internacionales mencionados arriba.

Es nuestra responsabilidad, de acuerdo con los mandatos que nos han sido otorgados por el Consejo de Derechos Humanos, intentar clarificar los hechos llevados a nuestra atención. En este sentido, estaríamos muy agradecidos de tener su cooperación y sus observaciones sobre los asuntos siguientes, siempre y cuando sean aplicables al caso en cuestión:

1. ¿Son exactos los hechos a los que se refieren las alegaciones presentadas?
2. Sírvanse proporcionar los motivos legales en los que se han basado los supuestos miembros del Gobierno para proceder al arresto del Sr. Cabañas.
3. Por favor, proporcione información detallada sobre el destino y el paradero del Sr. Cabañas. Si su destino y paradero son desconocidos, por favor proporcione información detallada sobre investigaciones iniciadas en relación con el caso. Si éstas no hubieran tenido lugar o no hubieran sido concluidas, le rogamos que explique los motivos.
4. Por favor, indique los motivos en los que se han basado las instituciones estatales y federales para denegar informaciones relativas al arresto, el destino y el paradero del Sr. Cabañas.
5. Sírvanse también proporcionar información detallada sobre las medidas de protección adecuada adoptadas por parte de las autoridades gubernamentales para garantizar que el Sr. Cabañas, abogado y defensor de los derechos humanos, no sea amenazado a raíz del ejercicio de sus funciones laborales y sus actividades legítimas.

Garantizamos que la respuesta del Gobierno de su Excelencia será incluida en los informes que presentaremos a la atención del Consejo de Derechos Humanos para que la examine.

Quisiéramos además informar al Gobierno de su Excelencia que, de presentarse las mencionadas alegaciones como un caso ante el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, el mismo será tratado por el Grupo

de Trabajo de conformidad con sus métodos de trabajo, en cuyo caso el Gobierno de su Excelencia será informado por medio de una comunicación separada.

A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades del Sr. Cabañas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiéramos asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan.

Acepte, Excelencia, la expresión de nuestra más distinguida consideración.

Ariel Dulitzky
Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias

Margaret Sekaggya
Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos

Gabriela Knaul
Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados